

SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PASTAZA

Juicio No. 16101-2012-0115

ING. FALVIO EDISON GRANIZO RODRÍGUEZ, ecuatoriano, de estado civil casado, de 41 años de edad, domiciliado en la ciudad de Riobamba, de profesión Ing. de Minas, en mi calidad de Coordinador Regional de la Agencia de Regulación y Control Minero de Riobamba, en relación a la Sentencia emitida por esta magistratura mediante AUTO de fecha 6 de Julio del 2012, a las 11h57, referente a la Acción de Protección presentada por **MARCELO TREMISTOCLES LALAMA HERVAS y MIREYA NATALY RIOS GUIJARRO**, de conformidad a lo establecido en el Art. 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional tengo a bien interponer ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN DE LA SENTENCIA emitida por esta magistratura mediante AUTO de fecha 6 de Julio del 2012, a las 11h57, ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL, la misma que la formulo al tenor de las siguientes consideraciones:

I LA CALIDAD EN LA QUE COMPAREZCO

Comparezco en calidad de Coordinador Regional de la Agencia de Regulación y Control Minero de Riobamba, nombrado mediante acción de personal No. 0317079 del 18 de abril del 2012, conforme lo justifico con la copia certificada del nombramiento que adjunto.

II CONSTANCIA DE QUE LA SENTENCIA O AUTO ESTÁ EJECUTORIADA

La Sentencia recurrida, se encuentra ejecutoriada por mandato expreso de la ley, más aún si la misma fue emitida mediante auto de fecha 6 de Julio del 2012.

III DEMOSTRACIÓN DE HABER AGOTADO LOS RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS

La sentencia recurrida tiene únicamente la instancia de apelación de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la misma que ha sido resuelta por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, con lo que se demuestra que se han agotado los recursos ordinarios y extraordinarios.

IV SEÑALAMIENTO DE LA JUDICATURA, SALA O TRIBUNAL DEL QUE EMANA LA DECISIÓN VIOLATORIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL.

La Sala que emana la decisión judicial violatoria del Derecho Constitucional o del debido proceso es la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza.

V. ANTECEDENTES

- Mediante Auto de fecha 16 de Mayo del 2012 a las 14h30, se dio Inicio al proceso Administrativo No. 27 H por Presunta Explotación Ilegal, la cual se la dio trámite teniendo como antecedente la denuncia presentada por el señor Fernando Isael Escobar Miranda, con cédula de identidad No. 1600109134, en donde manifiesta que es propietario de un cuerpo de terreno ubicado en el sector la Moravia, perteneciente a la Parroquia Shell, del Cantón Mera, Provincia de Pastaza, y que



el día 14 de Mayo del 2012, la señora Mireya Ríos, valiéndose de una excavadora y 6 volquetas, que se encontraban explotando material, arena y tierra que se encuentran en su propiedad, volquetas que salen cada quince minutos, labores que se están realizando desde hace un tiempo atrás, manifiesta además que la señora Mireya Ríos, tiene permiso provisional de minería artesanal para explotar la arena dentro de las coordenadas concesionadas, un volumen que no pase de 40 m3 y ser trabajado en forma manual, pero no con maquinaria grande, actualmente seis volquetas salen cada quince minutos. En el literal a) de dicho auto se dispuso, la práctica de la Inspección Técnica Administrativa del lugar antes descrito para el día 18 de mayo del 2012, con la concurrencia de los siguientes funcionarios: Ing. Flavio Granizo Coordinador de la Agencia de Regulación y Control Minero; Ing. Biron Suqui, Perito Técnico y Dr. César Robles, Actuario.

- El día 18 de mayo del 2012, a las 09h15 se procedió a realizar la diligencia Técnico Administrativa, conforme consta del Acta de Inspección Correspondiente, en donde se pudo observar que frente al cuerpo de bomberos del cantón Mera existía una entrada de dicha entrada aproximadamente a 1 Km, en forma descendiente nos encontramos con tres volquetas, dos de marca chevrolet de placas TBB-8781 y TBB-8784 que por versión del presunto infractor Dr. Marcelo Lalama manifestó que eran de su propiedad, la otra volqueta era de marca Mercedes Benz, de placas UBA-0481, las mismas que transportaban material pétreo arena, y al preguntar a sus choferes aquellos no pudieron justificar su legal procedencia, manifestando que la traían de las orillas del río, avanzando por dicho camino a 1 Km llegamos a las orillas del río pastaza en donde se pudo divisar a una cargadora color amarilla, serie 320BL, que realizaba labores de extracción de material pétreo arena, al acercarnos se encontró operando dicha maquinaria un señor que manifestó se llamaba Abraham Zambrano, que iba a llamarle al dueño que se llamaba Marcelo Lalama, minutos después llegó la señora Mireya Ríos y Dr. Marcelo Lalama, quienes se identificaron como peticionaria del área minera y dueño de la cargadora respectivamente, por lo que en ese momento se les requirió que presente el título minero o el permiso legal correspondiente para realizar trabajos de explotación con maquinaria pesada, una cargadora y tres volquetas, siendo presentado un permiso provisional de minería artesanal **no pudiendo justificar el permiso legal para la utilización de maquinaria pesada, constituyendo una distorsión al régimen especial de minería artesanal**, por lo que ese momento se les notificó con el inicio del proceso administrativo por presunta explotación ilegal, explicándoles motivadamente el contenido del auto, en donde se les ha dado a conocer las disposiciones legales pertinentes y que de conformidad a lo establecido en el Art. 56 y 57 de la Ley de Minería en concordancia con lo establecido en el Art. 99 del Reglamento General de la Ley de Minería, se ha procedido al decomiso provisional de la maquinaria (cargadora) que se encontraba en el lugar realizando actividades de minería sin el permiso legal correspondiente, dándoles a conocer además de su obligación que tienen de señalar casillero judicial a fin de que hagan uso de su derecho constitucional y legal a la legítima defensa. Proceso Administrativo que está signado con el número 27P-ARCOM-R, Y AL QUE HA COMPARECIDO EL ACCIONANTE MARCELO TEMISTOCLES LALAMA HERVAS, señalando casillero judicial para recibir notificaciones, del mismo modo y envista de que es un proceso administrativo que se caracteriza por el principio de celeridad, antes de resolver el Recurso de Apelación ya SE ENCONTRABA EL PROCESO EN LA ETAPA PROBATORIA, CONFORME LO JUSTIFIQUÉ CON LAS COPIAS CERTIFICADAS QUE YA CONSTAN EN EL PROCESO.

- Sorprendentemente los accionantes basan su fundamento para interponer la presente acción en el hecho de decir que han presentado de manera documentada la existencia del respectivo permiso para la actividad minera, lo cual es absolutamente falso, al respecto es necesario realizar el siguiente análisis, la accionante Mireya Nataly Ríos Guijarro al momento de la diligencia de inspección técnico administrativa, presentó un permiso provisional para que realice actividades bajo el régimen de minería artesanal, en la modalidad de trabajo familiar, de conformidad con lo establecido en el Art. 18 del Reglamento Especial de Pequeña Minería, permiso que fue otorgado previo a un trámite, el mismo que en 66 fojas certificadas adjunté al proceso en la Audiencia correspondiente, a fs. 7 y 8 consta el formulario de identificación del área susceptible a otorgamiento para minería artesanal, el mismo que mediante declaración juramentada celebrada el 10 de octubre del 2011 es reconocido por la peticionaria, en dicho formulario se establece la inversión a realizarse dentro de las actividades mineras artesanales; es decir, se establece lo que la ley le permite para que pueda explotar, **de este modo a fs. 7 en el casillero INVERSIÓN A DESARROLLARSE, únicamente la peticionaria establece que utilizará 5 picos, 10 palas, 10 carretillas, 3 clasificadoras, 10 equipos personal de minería; es decir, en ningún momento se ha establecido que va a utilizar una cargadora y tres volquetes;** dicho permiso se estableció sobre lo declarado; con lo que jamás estuvo autorizada a utilizar maquinaria pesada, pues la utilización de maquinaria pesada está expresamente prohibida por la ley, así lo determina el Art. 134 de la Ley de Minería que establece: **"Minería Artesanal.- Se considera minería artesanal y de sustento aquella que se efectúa mediante trabajo individual, familiar o asociativo de quien realiza actividades mineras autorizadas por el Estado en la forma prevista en esta ley y su reglamento y que se caracteriza por la utilización de herramientas, máquinas simples y portátiles destinadas a la obtención de minerales cuya comercialización en general sólo permite cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las realiza y que no hayan requerido una inversión superior a las ciento cincuenta remuneraciones básicas unificadas (USD 43.800)";** el Estado creo esta modalidad de minería con la finalidad de que la familia cubra únicamente sus necesidades básicas, **pero en el presente caso una cargadora marca Caterpillar serie 320BL y 3 volquetes, fácil superan los USD 400.000, y la producción no sólo que cubre las necesidades básicas, sino que se lucra aprovechándose dolosamente del título de permiso provisional de minería artesanal, pues el fondo de ello es que esta modalidad de minería no paga tributos,** pues la misma ley en su Art. 134 exonera el pago de patentes y regalías, pagos que si lo hacen los mineros serios y responsables, con este accionar no sólo están incurso en la infracción de explotación ilegal, determinado en el Art. 56 y 57 de la Ley de Minería en concordancia con lo establecido en el Art. 99 del Reglamento General de la Ley, **sino que además cometen defraudación tributaria, pues los recursos explotados no les pertenecen a los accionantes, sino al Estado ecuatoriano, y el no pagar impuestos cuando se tienen la obligación jurídica de hacerlo es defraudación tributaria.** De fs. 43 a fs. 37 del expediente de calificación, consta el permiso provisional de minería artesanal que según manifiestan les permitía hacer trabajos de explotación con maquinaria pesada, en dicho permiso provisional, en el considerando **SEGUNDO** se establece que: **"Es necesario regularizar al sector minero artesanal a través del otorgamiento de permisos para minería artesanal a fin de que estas actividades mineras se desarrollen dentro de lo que prescriben las normas constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente en aquellas**



prescritas en el Art. 18 del Reglamento Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal...", dicho artículo prescribe: **"Art. 18.- Minería artesanal.-** Se considera minería artesanal aquella que se realiza mediante el trabajo individual, familiar o asociativo de quien efectúa labores mineras en áreas libres, **única y exclusivamente como medio de sustento**, conforme se establece en el artículo 134 de la Ley de Minería...la Agencia de Regulación y Control Minero estará facultada para regular la explotación de minerales y seguridad minera que sean aplicables." El inciso primero del Art. 19 del Reglamento Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal determina: **"Naturaleza especial.-** Las actividades de minería artesanal, por su naturaleza especial de subsistencia, distintas de la actividad de la pequeña minería y minería a gran escala, no están sujetas al pago de regalías ni de patentes", **ahí está el fondo de la ilegalidad cometida por los accionantes porque a sabiendas de que no podía utilizar maquinaria pesada, y a sabiendas de que la minería artesanal por su naturaleza especial de subsistencia no paga un solo centavo de tributos por recursos que no les pertenecen sino al estado ecuatoriano, en si a los ecuatorianos y ecuatorianas, utilizan maquinaria pesada, buscando el lucro personal, PERO AÚN ASÍ EN FORMA INAUDITA MANIFIESTAN QUE NO SE TRATA DE UNA EXPLOTACIÓN ILEGAL, ENTONCES SEÑORES MAGISTRADOS ES LEGAL PERJUDICAR AL ESTADO, ES LEGAL APROVECHARSE DE UN PERMISO DE MINERÍA ARTESANAL CON EL SÓLO PROPÓSITO DE LUCRAR SIN PAGAR UN SOLO CENTAVO DE TRIBUTOS POR RECURSOS QUE NO LES PERTENECE.**

- Se indica por parte de los accionantes que no existe motivación en el Auto de fecha 16 de mayo del 2012, a las 14h30, tal parece que ni siquiera se han tomado la molestia de leer, puesto que se explica claramente un sinnúmero de disposiciones constitucionales y legales que facultan el accionar del ARCOM, específicamente en la parte pertinente en el literal b) y c) se determina: "En vista de que me encuentro investido de autoridad para suspender las actividades mineras; y como medida cautelar dispuesta en el Art. 87 de la Constitución de la República, Arts. 8 literal I) y 96 del Reglamento General de la Ley de Minería, con el objeto de cesar la violación o amenaza de los derechos constitucionales que tiene el Estado Ecuatoriano, consagrados en los artículo 1 y 408 de la mencionada Carta Constitucional, se procederá al decomiso de los equipos, maquinaria o parte de la misma que se encuentre utilizando para las actividades mineras presuntamente ilegales, amparados en el Art. 99 del Reglamento General de la Ley de Minería... c) De existir maquinarias y equipos decomisados serán conducidos a los patios de la Policía Nacional..., auto que se relaciona con el Acta de Inspección Técnica Administrativa, la pregunta es sencilla señores Magistrados, no se ha enunciado las normas y principios jurídicos aplicables, y no se ha explicado su pertinencia, claro que si, aquella acepción se la podía justificar si la accionante Mireya Ríos lo dice porque no conoce, pero que un profesional del derecho lo diga, eso si no puede tener justificación alguna.
- Se indica que se ha violado la seguridad jurídica, ya que testarudamente indican haber tenido el permiso legal correspondiente, parece que no saben diferenciar lo uno con lo otro, **lo único que tenían era un permiso provisional de minería artesanal, que en el caso que nos ocupa constituye el título minero otorgado e inscrito pero no constituye el permiso legal correspondiente y en el caso que nos ocupa el permiso para utilizar maquinaria pesada**, en dicho permiso en el considerando **DÉCIMO SEGUNDO:** Se dispone: "De igual manera, el

Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal en el inciso segundo de su artículo 19, de modo expreso señala: "La Agencia de Regulación y Control Minero, para fines de ejercicio de las actividades de su competencia inherentes al control de las actividades en minería artesanal contará con el apoyo del Ministerio Sectorial, del Ambiente, de Gobierno, de Defensa Nacional, de la Secretaría de los Pueblos, del Servicio de Rentas Internas, de la Junta Nacional de Defensa del Artesano y más órganos y dependencias del sector público, de la Función Judicial y de la Fiscalía General del Estado, **para las intervenciones que deba efectuar en caso de distorsiones al régimen especial de minería artesanal que constituyan infracciones de orden ambiental, minero, penal, social, laboral, tributario o migratorio, sin perjuicio de la revocatoria de los permisos que faculten las labores de minería artesanal....**"

Artículo este que guarda relación con lo determinado en el Art. 21 del mismo cuerpo de leyes citado que dispone: **"- Derechos y obligaciones de los titulares en minería artesanal.-** Se entienden por derechos mineros para minería artesanal, aquellos que emanan de los permisos otorgados por el Ministerio Sectorial a los que se refiere la Ley de Minería y el presente reglamento, los que tienen el carácter de intransferibles. **Las obligaciones que consten de manera expresa en los respectivos permisos y sean asumidas por sus titulares deben ser cumplidas por estos, como condición para el goce de los beneficios establecidos en la normativa legal aplicable al régimen especial de pequeña minería y minería artesanal. En consecuencia, su inobservancia o incumplimiento, constituirán causales de extinción de derechos y fundamento para la revocatoria de tales permisos, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles, penales o ambientales a las que hubiere lugar**", al respecto es preciso indicar además que: El Art. 313 de nuestra Constitución establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de prevención y eficiencia. El Art. 408 ibídem dispone que son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos. El Art. 9 literales a) y m) de la Ley de Minería prescribe como atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Minero, velar por la correcta aplicación de la Ley, sus reglamentos y demás normativa aplicable en materia minera; y, abrir, sustanciar y decidir los procedimientos destinados a la imposición de las sanciones establecidas en esta Ley. El Art. 150 ibídem establece que ejerce jurisdicción y competencia regulatoria y de control en materia minera la Agencia de Regulación y Control Minero, con las funciones y atribuciones que señala la presente ley y su reglamento general.

- El Art. 56 de la Ley de Minería determina: **" Explotación ilegal de minerales.-** Incurrirán en explotación ilegal de sustancias minerales quienes realicen las operaciones, trabajos y labores de minería en cualquiera de sus fases sin título alguno para ello **o sin el permiso legal correspondiente**"; es decir, si bien los accionantes pudieron demostrar que tenía título minero para minería artesanal, no tenía el permiso legal correspondiente PARA REALIZAR PEQUEÑA MINERÍA O MINERÍA A GRAN ESCALA, en donde se permite utilizar maquinaria pesada, pues su accionar está viciado de legalidad, PUES LA MINERÍA ILEGAL NO PAGA IMPUESTO ALGUNO, ya que busca el LUCRO PERSONAL; DAÑA EL MEDIO AMBIENTE, PUES SE LO HACE SIN NINGUNA NORMA TÉCNICA, es decir, ACTÚAN AL MARGEN DE LA LEY. El Art. 96 ibídem determina: **"Competencia.-** La Agencia de Regulación y Control Minero es competente para



conocer, tramitar y resolver, de oficio o a petición de parte, las infracciones tipificadas en la Ley e imponer las sanciones correspondientes; así, como adoptar las medidas cautelares necesarias para impedir la continuación del cometimiento del ilícito, sin perjuicio de la caducidad, indemnización por daños y perjuicios y por daños ambientales"; es decir que mi representada puede actuar de incluso de oficio, pues la Constitución y la Ley le han otorgado facultades jurisdiccionales para la regulación y el control de la actividad minera, y dentro de esas facultades está el adoptar cualquier medida cautelar para impedir la continuación del cometimiento del ilícito, una de estas medidas cautelares es el **DECOMISO**, el mismo que se encuentra específicamente determinado en el Art. 99: " **Explotación ilegal, decomiso y remate.**- La Agencia de Regulación y Control Minero de oficio o mediante denuncia, iniciará los procedimientos del caso si al momento de la inspección determinare la existencia de explotación ilegal, y, procederá a la inmediata suspensión de las actividades, al decomiso de la maquinaria con la que se estuviere cometiendo la infracción y de los minerales explotados, los mismos que quedarán bajo custodia de un depositario designado por la autoridad o de la Policía Nacional...", es decir Señor Juez mi representada ha obrado con jurisdicción y competencia, defendiendo los intereses del Estado Ecuatoriano

- Según la demanda interpuesta, se indica se ha violentado los derechos y garantías establecidos en los Art. 33, 66 numerales 15 y 17, 229 y 325 de la Constitución; es decir, el derecho al trabajo, el Art. 341 el derecho a una existencia digna, me imagino que quiso decir a enriquecerse a costa de bienes del estado no pagando un solo centavo de impuestos; art. 66 numeral 5, derecho al libre desarrollo, sin más limitaciones que los derechos de los demás, me imagino que quiso decir obrar sin respetar los principios legales y constitucionales, perjudicando al estado ecuatoriano, Art. 66 numeral 4, derecho de igualdad sin discriminaciones, me imagino que quiso decir que puede obrar sin ley ni orden, ósea a su arbitrio. Sin embargo Señores Magistrados nada se dice sobre los varios derechos que se inculcan ante una minería o explotación ilegal, pues son recursos que no les pertenece sino al Estado Ecuatoriano Art. 408 de nuestra Constitución, además al no realizar trabajos técnicos, se produce daños al medio ambiente, porque no se utiliza ningún tipo de tecnología que tienda a no contaminar, el suelo, aire o agua, es decir se atenta contra derechos constitucionales como derecho al agua, a un ambiente sano, a la salud, plenamente establecidos en los Arts. 12, 14, 32, **CON LO QUE EL COMBATE A LA MINERÍA ILEGAL, PROTEGE DERECHOS COLECTIVOS QUE AFECTAN NO SOLO A UNA PERSONA SINO A TODA LA SOCIEDAD, DE ALLÍ QUE BASADOS EN EL PRINCIPIO DE PONDERACIÓN, NO SE PUEDE ALEGAR QUE SE HA AFECTADO EL DERECHO AL TRABAJO Y DEMÁS DERECHOS DE LOS ACCIONANTES, CUANDO SU ACCIONAR AFECTA EL DERECHO DE TODOS LOS ECUATORIANOS, RECOGIDOS EN EL PRINCIPIO DEL BUEN VIVIR**, pues la naturaleza tiene el derecho a que se respete integralmente su existencia y su mantenimiento, siendo obligación del estado cualquier mecanismo para tales fines (Art. 71 y siguientes Constitución). **Además es preciso indicar que es responsabilidad de las ecuatorianas o ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley: 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. 6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.**

Sete - 7
4

- Dicha demanda que fue conocida en primera instancia por el Tribunal de Garantías Penales de Pastaza, quienes una vez que fueron escuchadas las partes en Audiencia Pública, en Sentencia resuelven desechar la presente demanda, por cuanto la demanda versa sobre un proceso administrativo plenamente impugnabile, siendo improcedente de conformidad a lo establecido en el Art. 40 numerales 3 y 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, constituyéndose en un asunto de mera legalidad, además analizan si se ha vulnerado derecho constitucional alguno, concluyendo que no toda vez que el accionar de los accionantes está expresamente prohibido en la ley, toda vez que el Estado les concedió un permiso para minería artesanal y no para minería a gran escala, constituyendo con ello en explotación ilegal, finalmente concluye que el decomiso practicado por mi representado está expresamente determinado en el Art. 56 y 57 de la Ley de Minería, con lo que nada tienen que manifestar, de tal forma que dicha disposición es parte del ordenamiento jurídico vigente por estar dentro de una Ley, la cual se constituye en un acto normativo de carácter general, y sólo la Corte Constitucional puede declarar que un acto normativo de carácter general es inconstitucional, por ser mandato de la Constitución en su Art. 436 num. 2 que como competencia de la corte establece: "Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos autoridades del Estado", concluye la resolución indicando que el accionante ni siquiera ha justificado la preexistencia de la maquinaria, ni su propiedad, lo cual constituye óbice al instante de resolver, que se debe considerar que el combate a la minería ilegal protege los derechos de la naturaleza, de lo que se colige que si la norma se incumple (Art. 56 de la Ley de Minería), no es la Agencia de Regulación y Control Minero la afectada, sino la naturaleza misma, pues de hacerlo no existiría una correcta regulación y control sobre la explotación de los recursos que se encuentra en ella, lo cual generaría su deterioro, situación que afecta gravemente al interés general y consecuentemente el *sumak kawsay*, porque es gracias a la naturaleza que desarrolla la vida de los ciudadanos, quienes deben vivir en armonía con la misma, recordando que la Constitución es una norma de carácter *erga omnes*, en la que si bien es cierto se dispone que los ciudadanos son titulares de derechos, estos lo son también de obligaciones, según lo determina el Art. 83 numerales 1, 6, 7, y 8 y Art. 11 numeral 9.
- Sin embargo los accionantes apelan de dicha resolución ante la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza y en un hecho sin precedentes, en una resolución de mayoría emitida por el DR. ERNESTOS PÉREZ BRITO y DR. BOLIBAR TORRES ORTIZ, y VOTO SALVADO EMITIDO POR EL DR. OSWALDO VIMOS RESUELVEN ADMITIR PARCIALMENTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL REVOCANDO EN TODAS SUS PARTES LA SENTENCIA SUBIDA EN GRADO, ACEPTANDO PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN, DEJANDO SIN EFECTO EL INFORME TÉCNICO DE CAMPO RELACIONADO CON LA PRESUNTA EXPLOTACIÓN ILEGAL, Y ORDENA LA INMEDIATA DEVOLUCIÓN DE LA MAQUINARIA DECOMISADA, indicando en la parte final que agregan al proceso el escrito presentado por parte del Ing. Flavio Granizo y las copias simples que al efecto adjunta, disponiendo que se entregue únicamente una copia simple a la parte contraria, manifestando en la parte final que Interviene en la presente causa y emisión de la sentencia el Dr. Ernesto Pérez Brito, EN CALIDAD DE JUEZ PROVINCIAL INTERINO.



V. IDENTIFICACIÓN PRECISA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL O DEBIDO PROCESO VIOLADO EN LA DECISIÓN JUDICIAL.

Es preciso indicar lo dispuesto en el Art. 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que dispone: **“Objeto.- La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución”;** (Lo subrayado y resaltado es mío), de allí que procedo a precisar los derechos constitucionales y el debido proceso violado en la sentencia judicial recurrida.

DERECHOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. **Se consideran sectores estratégicos** la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, **los recursos naturales no renovables**, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.

Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico.

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. **Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución.** El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.

Como propietario de tales recursos el Estado Ecuatoriano, a través de la Ley de Minería y su Reglamento General crean la Agencia de Regulación y Control Minero, concediéndole la facultad de controlar y vigilar la actividad minera en todas sus fases, concediéndole además la potestad de abrir y sustanciar los procesos administrativos por explotación ilegal, toda vez que el Estado participa del beneficio del aprovechamiento de tales recursos, pues constituye su legítimo propietario, dentro de estas atribuciones legalmente conferidas se sanciona a la Explotación Ilegal, de conformidad a lo establecido en el Art. 56 y 96 de la Ley de Minería en concordancia con lo establecido en el Art. 99 del Reglamento General de la Ley de Minería, que textualmente disponen: "**Art. 56.- Explotación ilegal de minerales.-** Incurrirán en explotación ilegal de sustancias minerales quienes realicen las operaciones, trabajos y labores de minería en cualquiera de sus fases sin título alguno para ello o sin el permiso legal correspondiente" (Lo resaltado es mío); es decir, si bien los accionantes pudieron demostrar que tenía título minero para minería artesanal, no tenía el permiso legal correspondiente PARA REALIZAR PEQUEÑA MINERÍA O MINERÍA A GRAN ESCALA, en donde se permite utilizar maquinaria pesada, pues su accionar está viciado de legalidad, PUES LA MINERÍA ILEGAL NO PAGA IMPUESTO ALGUNO, ya que busca el LUCRO PERSONAL; DAÑA EL MEDIO AMBIENTE, PUES SE LO HACE SIN NINGUNA NORMA TÉCNICA, es decir, ACTÚAN AL MARGEN DE LA LEY. El Art. 96 ibídem determina: "**Competencia.-** La Agencia de Regulación y Control Minero es competente para conocer, tramitar y resolver, de oficio o a petición de parte, las infracciones tipificadas en la Ley e imponer las sanciones correspondientes; así, como adoptar las medidas cautelares necesarias para impedir la continuación del cometimiento del ilícito, sin perjuicio de la caducidad, indemnización por daños y perjuicios y por daños ambientales"; es decir que mi representada puede actuar de incluso de oficio, pues la Constitución y la Ley le han otorgado facultades jurisdiccionales para la regulación y el control de la actividad minera, y dentro de esas facultades está el adoptar cualquier medida cautelar para impedir la continuación del cometimiento del ilícito" (Lo resaltado es mío), una de estas medidas cautelares es el DECOMISO, el mismo que se encuentra específicamente determinado en el Art. 99 que dispone: "**Explotación ilegal, decomiso y remate.-** La Agencia de Regulación y Control Minero de oficio o mediante denuncia, iniciará los procedimientos del caso si al momento de la inspección determinare la existencia de explotación ilegal, y, procederá a la inmediata suspensión de las actividades, al decomiso de la maquinaria con la que se estuviere cometiendo la infracción y de los minerales explotados, los mismos que quedarán bajo custodia de un depositario designado por la autoridad o de la Policía Nacional...", es decir Señor Juez mi representada ha obrado con jurisdicción y competencia, defendiendo los intereses del Estado Ecuatoriano" (Lo resaltado es mío), como lo he analizado en líneas anteriores, así como lo analizaron los miembros del Tribunal de Garantías Penales de Pastaza, y como lo analizó el Dr. Oswaldo Vimos al emitir VOTO SALVADO, mi representada la Agencia de Regulación y Control Minero Regional Riobamba, ha actuado dentro del marco constitucional y legal aplicable, en donde se ha instaurado un proceso administrativo por presunta explotación ilegal No. 27P-ARCOM-R al que incluso compareció el accionante Marcelo Lalama Hervas quien incluso señala casillero judicial, toda vez que al momento de la inspección se pudo constar que los presuntos infractores se encontraban realizando labores de explotación minera sin el permiso legal correspondiente, TODA VEZ QUE ABUSANDO DE UN PERMISO DE MINERÍA ARTESANAL QUE NO PAGA NI UN SOLO TRIBUTO Y QUE SÓLO LE PERMITE CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE SU FAMILIA REALIZABAN TRABAJOS DE PEQUEÑA MINERÍA O MINERÍA A GRAN ESCALA; es decir, dolosamente APROVECHABAN EN SU BENEFICIO PERSONAL PARA LUCRAR, Y PERJUDICAR AL ESTADO ECUATORIANO, COMETIENDO INCLUSO DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA Y



HASTA UN POSIBLE DELITO AMBIENTAL, toda vez que la explotación se lo realizaba a las orillas del río sin ninguna norma técnica ambiental ocasionando daños a la naturaleza.

Llega a tal punto la violación a tales preceptos, que la Sentencia recurrida textualmente indica: "... **En suma, los legitimados pasivos abusaron de su autoridad y ordenaron la retención de la maquinaria (herramienta de trabajo) pues estaban autorizados sin embargo de existir un permiso provisional legalmente conferido por autoridad legítima...**", llega a tal punto la barbaridad jurídica que indican textualmente lo siguiente: "... **por otra parte, el Art. 33 reconoce el derecho al trabajo como un derecho y por lo mismo según el Art. 329 inc. Tercero Ibídem "se prohíbe toda forma de confiscación cuando se trata de una herramienta de trabajo", entendiéndose "La confiscación, comiso o decomiso, en Derecho, es el acto de incautar o privar de las posesiones o bienes sin compensación, pasando ellas al erario público"**, posteriormente se contradice y siguen las acepciones sin orden lógico pues se indica: "... **Por otra parte, es de aclararse que a pesar de que los Arts. 56 y 57 de la Ley de Minería en concordancia con el Art. 99 del Reglamento General de Minería, facultan el decomiso de los vehículos cuando han estado "trabajando" dentro de una mina, al respecto hay que entenderse que el vehículo o la maquinaria son instrumentos de trabajo mas no son evidencias materiales de delitos y aún así justificando la propiedad se debe devolver porque no es posible angustiar el sustento de una familia y su derecho al buen vivir, de manera que esta evidente que existe vulnerabilidad de derechos subjetivos en la persona del legitimado activo Marcelo Lalama Hervas**" tal parece que ni siquiera se han tomado la molestia de ver en el proceso que a más de la maquinaria decomisada en el lugar, el pobre y por poco hasta desempleado Marcelo Lalama Hervas venía trabajando en el lugar con dos volquetes de su propiedad y que fácil entre todas las maquinarias suman los USD 300.000, CAUSA ASOMBRO SEÑORES MAGISTRADOS, EN PRIMER LUGAR SE INDICA QUE HEMOS ACTUADO SIN COMPETENCIA, parece que ni siquiera han sabido que existe la Ley de Minería, EN SEGUNDO LUGAR, autorizan con su Sentencia para que CUALQUIER PERSONA OBTENGA UN PERMISO DE MINERÍA ARTESANAL, y no pague ni un solo impuesto, perjudique al Estado Ecuatoriano que somos todos y utilizando dicho permiso en forma dolosa PUEDA REALIZAR CUANTA ACTIVIDAD O EXPLOTACIÓN MINERA, inclusive en forma irracional y anti técnica, eso es como si una persona que tiene licencia de conducir tipo B, manifieste que puede conducir cualquier tipo de vehículo, porque el estado le autorizó y le entregó una autorización de manejo, si dicha persona comete un accidente de tránsito manejando un vehículo camión, bajo este erróneo criterio se dirá que si bien causó el accidente estuvo conduciendo un vehículo autorizado por la ley. CLARO QUE NO SEÑORES MAGISTRADOS. Y FINALMENTE SE HABLA QUE SE HA ATENTADO AL DERECHO AL TRABAJO Y SE CONFUNDE EL DECOMISO COMO SI SE TRATASE LO MISMO QUE CONFISCACIÓN,, como si el estado permitiese el trabajo sustentado sobre una ilegalidad, bajo esa errónea concepción cualquier delincuente que actúa al margen de la ley, podrá robar, asaltar, hurtar, traficar drogas, y como el Estado le garantiza el derecho al trabajo, si son aprendidos y decomisadas las armas o los móviles que utilizaron para la perpetración de tales ilícitos, tranquilamente si interponen una Acción de Protección y recae en la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, de seguro van a decir QUE COMO SE PROHIBE TODA FORMA DE CONFISCACIÓN O DECOMISO QUE ES LO MISMO, DEBERÁN DEVOLVERSE LAS ARMAS, LOS VEHÍCULOS, LAS PROPIEDADES. Al respecto es preciso clarificar dicha acepción errónea, CONFISCACION Y DECOMISO SON DOS FIGURAS JURIDICAS AFINES, PERO CON CARACTERISTICAS PROPIAS QUE LAS DISTINGUEN. por la primera, debe entenderse la **apropiación violenta** por parte de la autoridad, de la totalidad de los bienes de una persona o de una parte significativa de los mismos, sin título legítimo y sin contraprestación; **en tanto que la última es aquella que se impone**

mere - 9
7

a título de sanción, por la realización de actos contra el tenor de leyes prohibitivas o por incumplimiento de obligaciones de hacer a cargo de los gobernados con la nota particular de que se reduce a los bienes que guardan relación con la conducta que se castiga, o sea, los que han sido utilizados como instrumento para la comisión de un delito o infracción administrativa, los que han resultado como fruto de tales ilícitos o bien los que por sus características, representan un peligro para la sociedad.

Señores Magistrados de la Corte Constitucional, el combate a la minería ilegal a más de defender los legítimos intereses del Estado Ecuatoriano, defiende uno de los derechos más importantes que lo reconoce nuestra actual Constitución; este es, el DERECHO DE LA NATURALEZA, plenamente consagrado en el Art. 71 y siguientes de la Constitución, toda vez que la MINERÍA ILEGAL, únicamente busca el lucro personal, no le importa cómo se obtengan los recursos, con tal que se vean saciados sus ilegítimos intereses, y en el caso que nos ocupa, los infractores ABUSANDO DOLOSAMENTE DE UN PERMISO OTORGADO POR EL ESTADO, REALIZABAN LABORES DE EXPLOTACIÓN MINERA PARA LO CUAL NO TENÍAN NINGUNA AUTORIZACIÓN, LA MÁQUINA CARGADORA QUE SE DECOMISO SE ENCONTRABA A DOS METROS DE LAS ORILLAS DEL RÍO, SIN NINGÚN TIPO DE MEDIDA O PRECAUCIÓN, PARA LOS JUECES QUE SENTENCIARON ESTE ACCIONAR ES LEGAL, ESTÁ RESOLUCIÓN ES TERRIBLE Y SUS CONSECUENCIAS SERÍAN DEVASTADORAS, PORQUE NO SÓLO AFECTA A UNA O DOS PERSONAS, SINO A TODO EL ESTADO ECUATORIANO, QUE SE HA VISTO MANCILLADO, AL VER CÓMO SE PERMITE QUE EL ESTADO SEA PERJUDICADO, QUE LA NATURALEZA SEA VIOLENTADA, Y CON ELLA EL DERECHO AL AGUA, A UN AMBIENTE Y ECOSISTEMA SANO.

DEBIDO PROCESO VIOLADO

Art. 76 numerales 1 y 7 literales c), k) y l) de la Constitución:

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

Dentro del proceso se pudo evidenciar claramente la falta de cumplimiento de normas y preceptos, plenamente establecidos, pues se desconoce a más de los derechos constitucionales antes mencionados, preceptos expresamente determinados en la Ley de Minería, a más de que podemos ver claramente la falta de imparcialidad en la misma sentencia, pues del texto se puede colegir que se transcribe íntegramente y textualmente los argumentos de los accionantes y son transcritos en cuatro fojas en tanto que nuestros argumentos únicamente constan cuatro líneas al manifestar textualmente que: **"por su**

parte el legitimado pasivo Dr. Robles igualmente por sus propios derechos y en representación del Ing. Flavio Granizo, manifiesta: ...que el permiso es para minería artesanal pero que ocupo maquinaria pesada en la modalidad de trabajo familiar, es ilegal y si bien tiene permiso pero hizo mal uso, como prueba entrega el expediente del trámite administrativo... (Acaso no se puede notar una falta de imparcialidad y una total desigualdad), más aún cuando solicité se me conceda Audiencia en Estrados y fue negada como si hubiese pedido Audiencia de Prueba, toda esta falta de probidad, imparcialidad y desigualdad se mira reflejado aún más cuando irónicamente mi escrito de fundamentación únicamente se manda a agregar al proceso y una copia sea puesta en consideración de la parte contraria, ya que textualmente manifiesta la resolución: **"Agréguese al proceso el escrito presentado por parte del Ing. Flavio Granizo Rodríguez y las copias simples que al efecto adjunta, lo cual entréguese una copia a la parte contraria..."**, copias que consistían en varias sentencias por acciones de protección en donde se abalizaba el accionar de la Agencia de Regulación y Control Minero, tal parece que la resolución ya se encontraba lista y ni siquiera se tomaron la molestia de leer mi escrito de fundamentación, lo que no ocurrió con los accionantes pues se transcribe 4 fojas, casi la mitad de la resolución contiene las argumentaciones de los accionantes, existiendo apenas 4 líneas que contenían si se pueden llamar así nuestras argumentaciones.

Art. 237 *Ibidem*.- Corresponderá a la Procuradora o Procurador General del Estado, además de las otras funciones que determine la ley: 1. La representación judicial del Estado. 2. El patrocinio del Estado y de sus instituciones.

Dentro del expediente se puede colegir QUE JAMÁS FUE CITADO EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO O SU DELEGADO, de conformidad a lo establecido en el Art. 237 de nuestra Constitución en concordancia con lo establecido en los Arts. 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, que establece que en aquellas demandas contra instituciones públicas que no se haya contado con la Procuraduría General del Estado o su delegado, el PROCESO SERÁ NULO, hecho este que tampoco es advertido por los jueces de mayoría que dictan el fallo, pese a que lo conocían, pues existía el VOTO SALVADO del Dr. Oswaldo Vimos quien en su resolución manifiesta textualmente lo siguiente: **"Si bien el procedimiento de acción de protección es sencillo y rápido, no es menos cierto también que debe ser notificados los accionados en forma legal, para que asuman la defensa de los intereses del Estado, lo que no acontece en este expediente, prueba de ello no ha comparecido el Procurador General del Estado, porque no le han notificado"** (Lo resaltado es mío);

Art. 42.- Improcedencia de la acción.- La acción de protección de derechos no procede:

1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales.

4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz.

Queda demostrada hasta la saciedad que mi representada ha actuado dentro del marco constitucional y legal, pues en representación del Estado Ecuatoriano vigila y controla la actividad minera en todas sus fases, de allí que ni siquiera se pueda aducir que existe violación de derechos constitucionales provenientes de una ilegalidad, más aún cuando

en la Sentencia recurrida se menciona que el señor Marcelo Temístocles Lalama Hervas es propietario de la maquinaria decomisada, y quien ofertaba su maquinaria de trabajo a la señora Mireya Nataly Ríos Guijarro, SIN EMBARGO EN AUTOS NO CONSTA SIQUIERA EL TÍTULO DE PROPIEDAD QUE LE ACREDITE SER EL PROPIETARIO DE LA MAQUINARIA DECOMISADA, Y LO QUE ES MÁS NI SIQUIERA EXISTE ALGÚN TIPO DE CONTRATO LEGALIZADO QUE PRESUMA QUE EXISTió RELACIÓN CONTRACTUAL CON LA SEÑORA MIREYA NATALY RÍOS GUIJARRO, hecho este, que causa asombro, porque tal parece que los jueces debieron haberle conocido al presunto infractor, para que deduzcan sólo por sus aseveraciones sin prueba alguna, que es propietario de la maquinaria decomisada y que existió relaciones contractuales entre ellos.

En el supuesto no consentido de que se hubiere determinado que existió vulneración de derechos constitucionales en el procedimiento de decomiso como medida cautelar que es materia del proceso administrativo; este puede ser plenamente impugnado de conformidad a lo dispuesto en el Art. 87 del Reglamento General de la Ley de Minería que dispone: **"Procedimientos, reclamos y recursos.-** De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Minería, son normas supletorias a esa Ley la normativa administrativa y contencioso administrativa... los reclamos y recursos administrativos para impugnar las actuaciones administrativas de las autoridades mineras, se regirán por el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Sin perjuicio de lo anterior, las resoluciones administrativas de las autoridades podrán ser impugnadas directamente en sede judicial, en la jurisdicción contenciosa administrativa, sin necesidad de agotar la vía administrativa", Artículo este, que guarda relación con lo determinado en el Art. 176 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva que dispone: **"Recurso de Apelación.- Objeto.-** Las resoluciones y actos administrativos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, **podrán ser recurridos en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha Administración...**"; **ES DECIR, LA PRESENTE ACCIÓN DE PROTECCIÓN A MÁS DE SER ILEGAL POR LAS RAZONES ANTES ENUNCIADAS, ES IMPROCEDENTE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 42 NUMERAL 4 DE LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL QUE DISPONE:** **"IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.-** La acción de protección de derechos no procede: 4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial...". Al respecto existe abundante Jurisprudencia, así lo recoge la Sentencia emitida por el Señor Juez Tercero de lo Civil y Mercantil de Chimborazo, Dr. Wilson Andino (HOY JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA), mediante Auto del 3 de febrero del 2009, Las 15h57, en donde el considerando QUINTO numeral 2 manifiesta: "Del propio texto de la demanda se instituye que se trata de un aspecto de legalidad el reclamo del demandante, a mas de ser un acto administrativo susceptible de otra acción y ante distinto juez", y en el numeral 4 determina: "En esta virtud, este Juzgado es incompetente para resolver la acción de protección". Es preciso indicar que el proceso administrativo se encuentra pendiente de resolución, y al respecto dicho fallo en el considerando OCTAVO determina: "Por tanto, se encuentra pendiente de resolución dicho trámite administrativo. Vale decir, que el principio de residualidad se mantiene en la Norma Suprema... Si no se ha hecho prevalecer esos derechos en las otras instancias y mediante procedimiento previo del acto administrativo impugnado, no opera la acción de protección planteada". De igual forma lo hace en los fallos Nos. 736-99RA, 29 IX 1999, No. 0227-2005-RA, 19 IV 2006, cuando manifiesta: "... sin embargo, se debe tener presente que la compareciente si bien ha encaminado su propósito por las vías que le franquean la ley, es preciso terminar aquel recorrido, es decir agotar la vía en sede administrativa", y en la parte resolutive en el considerando DECIMO "por no haberse agotado la vía administrativa, no opera la acción de protección propuesta". Sentencia Señora Juez que fue impugnada y resuelta por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo,



quienes mediante Auto de fecha 9 de abril del 2009. Las 17h55, en el considerando SEPTIMO determinan: "es más, la resolución emanada por sus personeros podía recurrir ante la vía contencioso administrativa... pues existían vías judiciales ordinarias para la reclamación de los derechos, de los que se creyere asistida, señaladas por la misma ley, en la vía contencioso administrativa", con lo que confirman la sentencia emitida por el señor Juez Acuo, declarando sin lugar la acción de protección. Sentencias que se encuentran adjuntas al proceso, y que ni siquiera fueron analizadas entre otras sentencias constitucionales.


Con estas consideraciones a fin de que no se cometa una barbaridad jurídica, en Sentencia Señores Magistrados de la Corte Constitucional, dejarán sin efecto lo ilegal e ilegítimamente resuelto por la mayoría de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, mediante Auto de fecha viernes 6 de julio del 2012, las 11h57, toda vez que EL COMBATE A LA MINERÍA ILEGAL HOY ES UNA POLÍTICA DE ESTADO, Y LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO ACTUANDO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY, DEFIENDE LOS INTERESES DEL ESTADO ECUATORIANO, ASÍ COMO DEFIENDE VARIOS DERECHOS COLECTIVOS, COMO EL DERECHO A LA NATURALEZA, AL AGUA, A UN AMBIENTE Y ECOSISTEMA SANO, NO PERMITAN QUE UNA RESOLUCIÓN ANTOJADIZA Y DESCABELLADA TRUNQUE CON SAGRADOS DERECHOS E INTERESES DEL ESTADO ECUATORIANO QUE SOMOS TODOS LOS Y LAS ECUATORIANAS.

Notificaciones que me correspondan las seguiré recibiendo en el casillero judicial que lo tengo señalado y en la Corte Constitucional las recibiré en el correo electrónico abril1879@hotmail.com o al casillero judicial No. 34 de la Corte Constitucional, o al casillero judicial No. 4.502 de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, del mismo modo autorizo al Dr. César Robles, abogado de la Agencia de Regulación y Control Minero Regional Riobamba para que en mi nombre y representación presente cuanto escrito fuese necesario en defensa de mis intereses en la presente causa.

Es justicia.

Firmo conjuntamente con el abogado de ARCOM-RIOBAMBA.


Ing. Flavio Granizo
**COORDINADOR REGIONAL
ARCOM - RIOBAMBA**


Dr. César Robles
**ESPECIALISTA LEGAL MINERO
ARCOM - RIOBAMBA**

Once-41
4



Consejo de la Judicatura

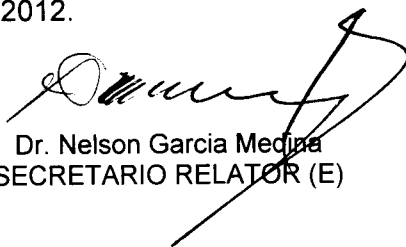
8166A001-369E-4D35-905C-9D30639AAB11

**CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PASTAZA
SALA UNICA DE LA CORTE PROVINCIAL**

Ingresado por: BRACHOG

Recibida el día de hoy, viernes tres de agosto del dos mil doce, a las doce horas y veinte y cinco minutos, el proceso seguido por: ING. FALVIO EDISON GRANIZO RODRIGUEZ en contra de DOCTORES:OSWALDO VIMOS VIMOS, BOLIVAR TORRES ORTIZ Y ERNESTO PEREZ BRITO, JUECES TITULARES Y JUEZ INTERINO DE LA SALA UNICA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PASTAZA, en: 10 foja(s), adjunta ACCION EXTRAORDINARIA DE PROTECCION,. Correspondió al número: 16101-2012-0147.

Pastaza, Viernes 3 de Agosto del 2012.



Dr. Nelson Garcia Medina
SECRETARIO RELATOR (E)



HONJA
BLANCO